PLENO SOBRE POLÍTICA FISCAL

Carlos Aguirre. Consejero de Economía y Hacienda
28 de mayo de 2012

Todos conocemos la gravedad de la situación económica y el diagnóstico es compartido por la mayor parte de los analistas. También coinciden las predicciones que sobre nuestro futuro más inmediato han presentado la mayoría de organismos e instituciones que analizan la coyuntura económica. Este año la economía se contraerá y la crisis se prolongará hasta 2013 si hacemos caso tanto a la Comisión Europea como a la OCDE, por citar los pronósticos más recientes.

Euskadi por mucho que se comporte algo mejor, no se alejará mucho de esa trayectoria. No puede hacerlo porque nuestro devenir económico está en gran medida determinado por el devenir de Europa y de España. Como he afirmado muchas veces, no somos una isla, una economía cerrada que pueda aislarse de los efectos de lo que acontece en el exterior.

Por eso nos afecta tanto la política económica que se está realizando en estos momentos, en Europa, y en España. Una política que no consigue mejorar la situación y hacer propuestas que nos puedan sacar de esta crisis cuanto antes y con el menor daño posible.

Pero hay otra alternativa, la que considera que el crecimiento es requisito previo para poder equilibrar las cuentas. Sin crecimiento no es posible romper el bucle de los procesos deflacionarios a que conducen las políticas de austeridad.

Detrás de cada una de estas dos alternativas hay una visión ideológica del modelo de sociedad. La nuestra propugna el crecimiento económico para hacer sostenible y mejorable el modelo europeo de prestaciones públicas. En esta Cámara, en este Parlamento, creo que son muy pocos los que piensan lo contrario.

Y hay margen para conseguir que el modelo sea sostenible. Si estudiamos los números, vemos que los desequilibrios macroeconómicos de la zona euro en su conjunto son equiparables o incluso menores que los de otras áreas económicas que están superando la crisis. En concreto, los desequilibrios de la eurozona en déficit o deuda pública son menores que en EEUU o el Reino Unido.

Asimismo, la balanza exterior de la zona euro está equilibrada, incluso mantiene capacidad de financiación con el resto del mundo en su Balanza de Pagos. Lo que existen son desequilibrios entre los diferentes estados miembros, fundamentalmente entre los del norte, con saldos positivos, y los del sur, con déficit de balanza.

Por ejemplo, tenemos mucha menos deuda y déficit que EEUU, y sin embargo sufrimos tensiones financieras graves que están poniendo contra las cuerdas el Euro. Porque esta crisis ha puesto de manifiesto que la zona euro no constituye una zona monetaria óptima, y por lo tanto ahora los costes de tener una moneda única son mayores que sus beneficios, sobre todo para las áreas económicas del sur de Europa.

Evidentemente existen soluciones. Una política económica de estabilidad neutral en el ámbito europeo requiere por un lado que los países sobreendeudados pongan en práctica políticas de ajuste pero, por otro lado y a la vez, que los países con exceso de ahorro lleven a cabo políticas de estímulo que tiren de la demanda agregada del conjunto de Europa.

De no cambiar la política económica en la dirección más integrada y expansiva, las consecuencias de la actual política de austeridad seguirán resultando brutales para los países con mayor problema de deuda soberana.

Se nos están imponiendo sacrificios que no son necesarios. Es más, son contraproducentes.

Estas reflexiones, que parecen de ámbito demasiado global, son sin embargo vitales para establecer el marco de nuestra política económica, y ello en los márgenes que nuestra pertenencia a la Unión Europea nos permite.

Dentro del marco de la política europea de estabilidad, el sector público de Euskadi tiene que realizar una política de consolidación fiscal (recorte del gasto y aumento del ingreso) que permita la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y es aquí donde disponemos de un cierto margen.

Hasta ahora esta consolidación fiscal la hemos hecho principalmente mediante el reajuste del gasto público. Con todo tipo de medidas de racionalización del gasto y aumento de la eficiencia. En definitiva logrando hacer más con menos. Pero todo tiene un límite.

Nuestro modelo de salida de la crisis plantea no dejar a nadie a su suerte, y por tanto el mantenimiento de los servicios y prestaciones sociales. En consecuencia el logro de la consolidación fiscal también debe contemplar el aumento de los ingresos públicos.

Es un modelo de consolidación fiscal diferente al que plantea el actual Gobierno del PP en España que consiste básicamente en la disminución del gasto público, y por tanto de servicios y prestaciones. El Programa de Estabilidad propone disminuir el papel del Estado en la sociedad española, reduciendo el gasto público casi en 6 puntos porcentuales del PIB de aquí al 2015. Esta, desde mi perspectiva, es la vía más injusta, y además la menos eficaz.

La propuesta más justa para equilibrar las cuentas y mejorar el papel redistributivo del sector público es a través de los impuestos. La cuestión debe ser cuál es la presión fiscal que necesitamos para poder mantener el modelo económico y el Estado de bienestar que hemos elegido. Este es desde mi opinión el núcleo del debate que hoy se plantea en el Parlamento.

Porque las clases trabajadoras están sufriendo esta crisis en mayor medida, y están soportando el aumento de la competitividad de la economía española.

Veamos las cifras. Los últimos datos nos dicen que la continua caída del coste laboral por unidad de producto está permitiendo un incremento de la competitividad española sin necesidad de ajustar los márgenes empresariales. Y el mismo efecto se produce en la economía vasca.

El excedente empresarial ha aumentado a un ritmo del 6,3% interanual en los años de crisis mientras que la renta que se llevaban a casa los trabajadores asalariados ha descendido a un ritmo del 1%. Y encima se siguen planteando medidas de recortes sociales.

Pero ni siquiera es efectivo desde el punto de vista económico. Además de la injusticia social que supone, disminuir salarios a la postre es disminuir demanda agregada

porque la propensión al consumo es mayor en las rentas medias y bajas que en las altas.

Esto es así. Debemos tener en cuenta que el salario no es solo un elemento más del coste de un producto o un servicio. La renta salarial es también el factor básico que determina la demanda interna de un país, y por tanto hay que saber modularla.

Las sociedades más avanzadas económica y socialmente coinciden con aquellas que tienen una mejor distribución de la renta con una importante clase media y una clase trabajadora bien remunerada, lo que constituye un motor económico de desarrollo.

Y paso ya a hablar de la política fiscal. Luego entraré más concretamente de la política tributaria.

Lo cierto es que todo el desajuste fiscal viene por la caída de los ingresos. La recaudación por tributos concertados, que llegó a representar el 20,7% del PIB vasco en 2007, cayó dramáticamente al 16,8% en 2009, lo que supuso un descenso de 3.000 millones de euros.

Desalienta comprobar que la recaudación tributaria de 2011 es todavía un 16,6% inferior a la de 2007, y apenas sobrepasa el nivel de recaudación de 2005.

La distancia sobre nuestra presión fiscal media histórica (19%) es de 1,6 puntos, lo que traducido en términos de recaudación significa en torno a los 1.000 millones de euros.

A pesar de todo ello, este Gobierno ha logrado mantener la cantidad y calidad de nuestros servicios públicos, hacer más con menos, mejorando la gestión de unos recursos escasos.

Pero cada vez hay menos margen. El gasto, sobre todo el de carácter social es muy inflexible a la baja. De hecho, durante la anterior década los crecimientos anuales en Sanidad y Educación se situaban en dos dígitos.

Ya en el inicio de la crisis, entre 2007 y 2009, el presupuesto liquidado creció casi un 20% (el 19,4%), cuando la recaudación descendió un 21,6%. Un desfase que empezó a corregirse a partir de ese 2010, cuando la ejecución presupuestaria descendió en términos homogéneos respecto a 2009. Y a partir de ahí lo ha seguido haciendo, mientras que los ingresos tributarios desgraciadamente no repuntan.

En consecuencia todavía presentamos un serio desajuste fiscal, que puede convertirse en estructural si no somos capaces de adoptar las medidas oportunas para corregirlo.

El Programa de Estabilidad español y los Planes Económico Financieros de Reequilibrio de las Comunidades Autónomas establecen una senda de corrección del déficit que este Gobierno está dispuesto a cumplir, tal y como viene recogido en el PEF de la Comunidad Autónoma de Euskadi 2012-2014 que suscribimos con la Administración Central el pasado 27 de marzo.

Por su parte el Programa de Estabilidad presentado por el Reino de España en Bruselas establece unos compromisos de consolidación fiscal extraordinariamente duros, con una estimación para 2013 de saldo primario positivo, es decir, sin déficit una vez descontados los gastos financieros.

A nosotros como Gobierno Vasco nos corresponde el esfuerzo de reducir el déficit desde el 1,5% actual al 0,5% en 2013, es decir, otros 670 millones de euros.

En las circunstancias actuales una reducción de este calibre resulta imposible realizarla únicamente a través de ajuste en el gasto, sino que tiene que ser fruto de una estrategia integral en materia de política fiscal.

Desde luego este Gobierno no está dispuesto a cruzar determinadas líneas rojas que ponen en cuestión los cimientos del modelo socio-económico vasco. Y mucho menos sin haber profundizado en la otra vía que nos posibilita la Constitución, el Concierto Económico y el Estatuto de Autonomía como son nuestras amplias competencias en materia tributaria.

Aquí nos estamos jugando mucho más que una ventaja política de cara a una contienda electoral. Lo que estamos hablando aquí es del modelo de país, de cuales son los estándares mínimos sobre los que todos estamos de acuerdo, en Sanidad, en Educación, en Atención a la Dependencia, en Vivienda, en I+D+i, etc., y en como los financiamos, porque con el modelo actual es muy difícil que podamos hacerlo. Un tema vital este sobre el que luego volveré.

Porque ahora quisiera hablar de lo que ocurre en nuestro entorno. Es bueno hacerlo, porque podemos sacar enseñanzas y referentes.

La comparación de nuestro PIB per cápita nos sitúa entre las regiones europeas con mayor desarrollo económico. Sin embargo, nuestra presión fiscal no alcanza esos mismos niveles. Nos encontramos a una distancia considerable respecto a los países que nos sirven de referencia. A más de 4 puntos de PIB del Reino Unido, a 6 puntos de Alemania, a más de 10 puntos de Francia o Italia, o a 16 puntos de Dinamarca.

Nuestra presión fiscal se sitúa entre las más bajas de la Unión Europea. Y cada punto de PIB en Euskadi viene a representar 660 millones de euros.

Estos países europeos de referencia han sido capaces de mantener sus niveles de presión fiscal en ratios parecidas a las de antes de la crisis. En nuestro caso sin embargo, resulta evidente que no hemos hecho una gestión de los ingresos tributarios que permita mantener la presión fiscal, ni siquiera descontando el efecto del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Y no estoy hablando de incrementar el peso de los impuestos en la economía, solo estoy planteando el objetivo de mantener el porcentaje de nuestros tributos en el PIB, también en tiempos de crisis, como han hecho los países europeos de referencia. Si pertenecemos a un espacio económico europeo que es asimétrico, no debemos, ni podemos, profundizar en esta asimetría, porque no alejaríamos de sus estándares.

Este, el europeo, es un aspecto vital en todo el debate. Pertenecemos al espacio económico y social europeo, y por tanto no somos una isla. Nuestra pertenencia a la Unión Económica y Monetaria nos ha reportado muchísimas ventajas en lo económico, y también en lo social.

Aquí están los datos. En 1985, antes de entrar en el Comunidad Económica Europea, nuestro PIB era de 11.600 millones de euros. En 2000, al entrar en la Unión Monetaria, de 41.600, y ahora esta cerca de los 66.000 millones. En poco más de 25 años hemos multiplicado por 10 nuestro PIB en términos nominales, y por 2,4 en términos reales. Desde la entrada en la moneda única, año 2000, nuestro PIB ha crecido un 58% en términos nominales y un 23% en términos reales. Y tan importante como esto, hemos

consolidado un modelo productivo fuerte y eficiente basado en el conocimiento, la calidad, la innovación y la internacionalización capaz de crear empleo y situarnos en una posición competitiva nada despreciable dentro de esta compleja y globalizada economía que ahora vivimos.

Ciertamente hemos avanzado mucho en el ámbito económico, pero posiblemente lo hayamos hecho más en el ámbito social. Durante estos últimos 25 años hemos construido entre todos, y con un gran consenso, un modelo social vasco que garantiza prestaciones y servicios básicos en materia educativa, sanitaria o de servicios sociales, hasta equipararnos a nuestros referentes europeos. Porque nuestro referente, no lo olvidemos, y no me cansaré de repetirlo, es el modelo social europeo, y no otro.

En este contexto mucho ha tenido que ver la fiscalidad, porque la fiscalidad es la principal herramienta para la financiación del Estado del bienestar, los servicios públicos, y de la modernización del tejido productivo. Por tanto, el debate sobre nuestro sistema tributario se inscribe dentro de esta defensa de nuestro modelo económico y social. Porque con los niveles actuales de recaudación y presión fiscal no es posible mantener y garantizar para el futuro nuestro modelo tal y como ahora lo conocemos.

Pero hay más. La Eurozona nos ha proporcionado muchos beneficios, pero también nos ha restado autonomía y margen de maniobra en materia de política económica. La política monetaria la dicta, nos guste o no, el Banco Central Europeo. El déficit y el endeudamiento público están condicionados, nos guste o no, por los acuerdos de estabilidad. Las reglas del comercio exterior y de aranceles también son comunes.

En realidad lo que nos queda es la política tributaria, y además dentro de unos márgenes.

Es por ello que desde el Gobierno hemos venido reclamando la apertura de un proceso de reflexión sobre la necesidad de reformar nuestro sistema fiscal para garantizar en el futuro nuestro modelo económico y social, dentro de un escenario de equilibrio entre ingresos y gastos públicos.

A pesar de lo intrincado de nuestro entramado institucional, podemos decir que hemos conseguido incorporar el debate fiscal al escenario de crisis y recuperación económica.

Porque, como he dicho, no podemos fiar nuestras políticas solo al ajuste en el gasto, y al endeudamiento sin que previamente se haya producido un debate sobre el sostenimiento de nuestro modelo y su financiación.

No voy a repetir lo ya dicho por el portavoz del Grupo Socialista en relación a las iniciativas y esfuerzos del Lehendakari para impulsar una reflexión sobre nuestro sistema fiscal. Desde hace dos años el Lehendakari y también el Departamento de Economía y Hacienda han presentado diferentes iniciativas, las conocen de sobra.

Y ahora nos encontramos en este Pleno sobre Fiscalidad. Siempre hemos entendido que el Gobierno y este Parlamento no son ajenos al debate fiscal. El Gobierno Vasco es la institución competente para la provisión de los servicios sanitarios y educativos, así como, entre otros, los de integración social, seguridad ciudadana, vivienda, política industrial, I+D+i, etc.... En este Parlamento se debaten y aprueban cada año las diferentes leyes, entre ellas la de Presupuestos.

Sin embargo, aunque al Gobierno le corresponden el 70% de los recursos obtenidos por nuestro sistema tributario, este Parlamento carece en última instancia de competencias en la determinación del tamaño de los recursos públicos disponibles. Este Parlamento no cuenta con herramientas en el ámbito normativo tributario para atender las necesidades de financiación que puedan requerir la provisión de los servicios públicos.

Son las Instituciones de los Territorios Históricos a las que corresponde establecer, regular y gestionar, dentro de su territorio, su régimen tributario.

Entendemos que la autonomía política, también la de las Instituciones Comunes, requiere como instrumento indispensable de la autonomía financiera. Ello implica acceder a un sistema adecuado y suficiente de ingresos.

La autonomía financiera va, por tanto, estrechamente ligada a la suficiencia financiera, precisando para ello de medios económicos para desarrollar las funciones encomendadas.

De otro modo, se utiliza la capacidad normativa tributaria para no ejerciéndola restar la obtención de nuevos recursos públicos que financien los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, o para trasladar a gasto fiscal medidas antes establecidas vía programas de gasto foral, con la consiguiente merma de recursos para las Instituciones Comunes. O simplemente se aprueban iniciativas de índole tributaria que drenan la recaudación, conociendo que la parte más sustancial correrá a cargo del Gobierno Vasco.

Como antes ha dicho el Sr. Pastor, los datos de gasto fiscal están en los presupuestos de cada año. Como saben los gastos fiscales pueden definirse como la cuantificación de la disminución de ingresos tributarios que presumiblemente se producirá a lo largo del año, como consecuencia de la existencia de incentivos fiscales orientados al logro de determinados objetivos de política económica y social.

Conforme a esta información el gasto fiscal en tributos concertados con normativa autonómica, y sobre los que las Haciendas Forales tienen capacidad de decisión, asciende a 2.660 millones de euros en 2012. El 70% de esta cantidad son 1.860 millones de euros. Miren si tiene incidencia en las políticas del Gobierno Vasco.

Un debate este sin duda sugerente. Qué políticas públicas se realizan a través de gasto en el presupuesto, y cuales a través de gasto fiscal. Y qué es más eficiente y justo desde el punto de vista económico y social. Y quién tiene la competencia sustantiva en cada materia según el Estatuto. Por poner unos ejemplos, en vivienda, en políticas de empleo, o en política industrial.

Sin embargo todas las iniciativas del Gobierno o en este Parlamento son interpretadas como una intromisión en las competencias forales tributarias, dificultando así un enfoque integral del sistema tributario en el que primen unos análisis más profundos capaces de dar respuesta a la actual crisis económica y a los desequilibrios de las finanzas públicas.

En este análisis, en el que siempre hemos subrayado la fiscalidad como principal herramienta para la financiación de las políticas públicas, se han desvelado algunos factores que hasta el momento escapaban al debate público.

En primer lugar la necesidad de definir una nueva fiscalidad que garantice la equidad, la eficiencia y la suficiencia.

Precisamos de una reforma de nuestro sistema tributario que ponga el acento en el reparto justo de la carga tributaria entre los contribuyentes, tanto en términos de fraude y elusión fiscal como de progresividad y de tributación de la riqueza.

El fraude constituye el primer factor que quiebra los principios de equidad, de progresividad y de solidaridad que inspiran nuestro modelo tributario y social. En consecuencia, es preciso impulsar y redoblar los esfuerzos de todas las instituciones implicadas para alcanzar un compromiso público compartido que se materialice en un mensaje conjunto y en un programa de colaboración interinstitucional en la lucha contra el fraude, que permita presentar periódicamente los medios y las medidas puestas en marcha y, también, su eficacia.

Al mismo tiempo, es preciso activar medidas contra la elusión fiscal. Hay un recorrido por hacer para corregir nuestra normativa tributaria y de esta forma evitar que algunos contribuyentes la utilicen para reducir su aportación.

También debemos avanzar en la tributación de la riqueza. La imposición sobre la riqueza representa en promedio un 2% del PIB, tanto en los países de la OCDE como de la UE-15. En Euskadi, para alcanzar este resultado nos faltan 0,6 puntos de PIB, 400 millones de euros.

Se trata de recuperar los niveles de presión fiscal perdidos, para ello también proponemos una reforma de nuestro sistema tributario que suponga mejorar el potencial recaudatorio de nuestro sistema fiscal.

Ello significa reorientar y reconducir nuestro sistema fiscal de forma que a la vez que se avanza hacia una senda estable de crecimiento económico puedan recobrase paulatinamente niveles de presión fiscal de nuestros tributos concertados compatibles con el desarrollo de nuestro Estado del bienestar.

En segundo lugar, necesidad de avanzar en la autonomía financiera de las Instituciones Comunes para el ejercicio de sus competencias y responsabilidades.

El Parlamento Vasco carece de competencias en la determinación del tamaño de los recursos públicos disponibles. No cuenta con herramientas en el ámbito normativo tributario para atender las necesidades de financiación que puedan requerir la provisión de los servicios públicos.

Si bien es cierto que el Estatuto de Autonomía atribuye al Parlamento Vasco la competencia en materia de armonización, coordinación y colaboración fiscal, luego reiterada en la LTH y el propio Concierto Económico, y que este precepto se desarrolló a través de la Ley 3/1989, el modelo fiscal en los últimos años no ha funcionado de forma adecuada, socavando la autonomía financiera del Gobierno Vasco y, por tanto, condicionando el ejercicio de sus competencias y responsabilidades. Dicho más claro, decisiones por el lado de los ingresos está condicionando el modelo social vasco, y lo hace como no ocurre en ninguna otra administración federal o regional europea.

En este sentido resulta conveniente la utilización de los resortes de los que dispone nuestro ordenamiento jurídico para, con el consenso político suficiente, reforzar la autonomía financiera de las Instituciones Comunes, de forma que exista una mayor correspondencia entre responsabilidades de gasto y de ingreso, un mayor equilibrio entre la capacidad para decidir sobre la provisión de bienes y servicios públicos y la capacidad para determinar la composición de los ingresos públicos.

Ello, sin duda, reforzará la cohabitación en armonía de las distintas instituciones desde el respeto al ámbito de sus respectivas competencias y fortalecerá la cohesión territorial para el conjunto de Euskadi.

Nuestro sistema de relaciones financieras, a diferencia de los modelos de otros estados federales en los que se ha venido observando una tendencia creciente a la corresponsabilidad fiscal de los diferentes niveles de gobierno, no optó por ese modelo ni ha evolucionado en el tiempo hacia mayores cotas de corresponsabilidad fiscal.

Es muy peculiar en comparación con la mayoría de los sistemas federales que, el nivel institucional que tiene atribuidas menos competencias en términos de gasto, el nivel foral, sea el competente para decidir sobre la mayor parte de los ingresos de las Administraciones Públicas Vascas.

Y, por el contrario, que el nivel institucional al que se han encomendado mayores competencias, el nivel autonómico, sea el que menor capacidad de decisión tiene sobre el ingreso.

El modelo ha podido funcionar bien en contextos de consenso interinstitucional, pero tiene evidentes riesgos de naufragar en situaciones de desacuerdo entre las instituciones.

Desde mi perspectiva nuestro modelo que no es eficiente o ineficiente en si mismo, sino en la medida en que las decisiones públicas o la práctica política lo sean, y puedan ocasionar o no distorsiones.

Nuestro modelo de financiación está especialmente diseñado para un correcto funcionamiento en condiciones de acuerdo interinstitucional, pero en contextos de desacuerdo en cuestiones fundamentales, creo que el modelo no funciona. En todo caso es un modelo que se está demostrando muy poco dinámico y versátil en los momentos actuales.

En tercer lugar, utilización de la fiscalidad como instrumento dinamizador de la actividad económica

La fiscalidad sustenta su realidad, además de en el derecho tributario, en la actividad económica, en hechos económicos que luego son gravados por los tributos. Desde este punto de vista, el sistema fiscal también es un instrumento relevante de promoción económica, de incentivo de la actividad, de estímulo de determinados comportamientos de los contribuyentes, y de apoyo al proceso de modernización de nuestro modelo productivo.

Este Gobierno defiende una política económica capaz de mantener unas cuentas públicas sanas y de controlar el endeudamiento, pero sin asfixiar a los agentes económicos. Somos partidarios de estímulos públicos al crecimiento, realizados de forma inteligente y orientados a fortalecer la formación, promover la innovación y la

investigación, y fomentar el espíritu emprendedor, la internacionalización de nuestras empresas y el respeto al medio ambiente.

En este sentido, además de los apoyos de tipo financiero que puedan establecerse desde distintos programas públicos, también el Concierto Económico pone a nuestra disposición la posibilidad de utilizar las herramientas e incentivos tributarios para la promoción de nuevos proyectos capaces de consolidar y generar empleo.

Con el propósito de optimizar los recursos públicos destinados a la dinamización de la actividad económica, consideramos conveniente llevar a cabo de forma coordinada las políticas de estímulo e incentivo, bien se realicen éstas vía programas de gasto o vía beneficios fiscales.

Se nos ha acusado de intromisión en asuntos de competencia foral, y al mismo tiempo, de forma contradictoria, de no concretar propuestas tributarias.

Creo que nuestra actitud y nuestros planteamientos han sido coherentes con las normas que regulan las relaciones interinstitucionales y la distribución de competencias. Por eso, hemos tratado de canalizar nuestra preocupación por la gestión de los ingresos tributarios a través de los órganos previstos para ello. Y reiteradamente hemos demandado la necesidad de abrir un debate interinstitucional sobre la política tributaria, y lo hemos hecho tratando de residenciar el debate en el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, donde la Ley prevé que colaboren, se coordinen y armonicen en materia tributaria las instituciones vascas.

Porque no es suficiente con políticas desde el lado del gasto. Creo que el esfuerzo del Gobierno Vasco en este ámbito es palpable, en casos a través de medidas muy duras, que no nos ha gustado adoptar. Gestionar la escasez de recursos cuando las necesidades son crecientes es complicado y a veces ingrato. Pero esto es gobernar, y lo estamos haciendo.

Pero no podemos ni debemos fiar todo al ajuste en gasto, no voy a volver a argumentarlo. La política fiscal para enfrentar la crisis necesita también el apoyo de la política tributaria, y aunque el Gobierno Vasco tiene limitaciones en este campo porque la competencia corresponde a las instituciones forales, no las tiene sobre la política económica general, ni mucho menos sobre el diseño del modelo de país, y sobre cómo deben ser los servicios y prestaciones públicas.

Los indicadores revelan, por comparación con otros países, que no ha habido una gestión adecuada de los ingresos. Las instituciones competentes, las Diputaciones Forales, hasta ahora se han mostrado incapaces para sostener los ingresos en las ratios que como media han de ser nuestro objetivo.

Y esta incapacidad me lleva a una reflexión:

o el actual sistema tributario no sirve para responder al principio de suficiencia en tiempos de crisis y ha de adaptarse convenientemente,.

o la gestión tributaria es deficiente y hay más recursos que escapan a la tributación.

Tanto si hay que cambiar el sistema tributario para adaptarlo a la situación de crisis, si convenimos que ya no cumple con el principio de suficiencia, como si hay que poner mayor énfasis en el combate del fraude, la responsabilidad de la gestión de los

ingresos corresponde fundamentalmente a las Diputaciones y hasta ahora los resultados no son los esperados.

Nosotros como Gobierno estamos dispuestos a colaborar, pero ni han ofrecido alternativas al modelo actual ni han aceptado la colaboración del Gobierno, ni para revisar el sistema tributario, ni para diseñar una acción conjunta para combatir el fraude.

Espero sinceramente que este debate sirva para iniciar un nuevo tiempo en el campo de la política tributaria, y que las resoluciones que se aprueben en este Pleno sirvan para lograr lo que estimo todos los presentes deseamos:

- Un modelo que mejore el potencial recaudatorio de nuestro sistema fiscal y nos acerque a las presiones fiscales medias de la UE.
- Un modelo que ayude a la recuperación económica.
- Y una mayor colaboración interinstitucional en este campo, que buena falta nos hace.

En definitiva, un modelo que cumpla los principios generales de equidad, eficiencia, sencillez y suficiencia